

bolsa de sus recursos depredando la del prójimo detrás de una máscara farisaica de conservacionismo radical ¹⁵. Y han sido Nueva Zelanda y Australia quienes en el verano del mismo año se han puesto a la cabeza de la airada campaña diplomática y judicial de los ribereños del Pacífico contra la reanudación del programa de ensayos nucleares subterráneos de Francia en la Polinesia francesa ¹⁶, una Australia, por

¹⁵ Sobre los hechos que dieron lugar a esta situación y el contexto del Derecho del Mar en que se produjeron, vid. J. DIEZ-HOCHLEITNER, *El asunto 'Estai'. Mucho más que un incidente*, El Boletín M.A.P.A., abril 1995, núm. 22, págs. 43-51; L. PÉREZ-PRAT, *La alta mar: no es de Canadá*, Meridiano Ceri, mayo 1995, núm. 3, págs. 9-12. Tb. R. CASADO RAIGÓN, *L'application des dispositions relatives à la pêche en haute mer de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer*, Espaces et Ressources Maritimes, 1994, núm. 8, págs. 210-219. España interpuso una demanda contra Canadá ante la Corte Internacional de Justicia el 28 de marzo de 1995 (reproducida en Meridiano Ceri, mayo 1995, núm. 3, págs. 27-30). Una Orden de la Corte, de 2 de mayo de 1995, decidió tratar separadamente la cuestión de su jurisdicción, objetada por Canadá, antes de entrar en el fondo del asunto. De conformidad con ello, España depositó su Memoria el 29 de septiembre de 1995. Canadá ha de presentar su Contramemoria el 29 de febrero de 1996 (que es bisiestro).

¹⁶ Ya en 1973 Australia y Nueva Zelanda demandaron a Francia ante la Corte Internacional de Justicia por sus ensayos nucleares en el océano Pacífico. La primera ciñó su demanda a los ensayos atmosféricos; no así la segunda. Pero la Corte recondujo el objeto de la demanda neozelandesa también a éstos y, basándose en declaraciones unilaterales francesas prometiendo la no realización de más ensayos, estimó —por nueve votos contra seis— que ya no había razón para un pronunciamiento judicial, si bien en uno de los últimos *considerandos* de las sentencias observó que «si el fundamento de la presente sentencia fuese puesto en entredicho, el demandante podría solicitar un examen de la situación, conforme a las disposiciones del Estatuto (de la Corte)» (ss. del 24 de diciembre de 1974, par. 60 y 63 respectivamente, Recueil CIJ, 1974, págs. 253 y ss., 457 y ss.). Invocando este *dictum*, Nueva Zelanda

cierto, hasta hace poco demandada por partida doble ante la Corte Internacional de Justicia, primero, por haber permitido, con la explotación de los fosfatos, la degradación del medio ambiente de Nauru mientras fue responsable principal de su administración¹⁷, y luego, por haber concluido el 11 de diciembre de 1989 con Indonesia —que ocupa por la fuerza Timor

requirió el 21 de agosto de 1995 el pronunciamiento de la Corte sobre la situación resultante de la decisión francesa (declaración Chirac del 13 de junio de 1995) de proceder a una última serie de ocho ensayos nucleares *subterráneos* en el Pacífico sur, a partir del mes de septiembre, así como la indicación de medidas cautelares con el fin de que Francia se abstuviese de llevar a cabo los ensayos y realizase una evaluación de su impacto medioambiental conforme a normas internacionales reconocidas. Australia —y algunos de los microestados archipelágicos del Pacífico (Marshall, Micronesia, Samoa y Salomon)— solicitaron intervenir en el procedimiento. El 22 de septiembre de 1995 la Corte, por doce votos contra tres, decidió mediante una Orden, que las cuestiones planteadas por Nueva Zelanda no entraban en las previsiones del *dictum* judicial de 20 de diciembre de 1974, habida cuenta de que su fundamento era el compromiso de Francia de no proceder a nuevos ensayos nucleares *atmosféricos*, por lo que rechazó la demanda, aunque precisando que ello no dispensa a los Estados «de respetar y proteger su entorno natural». Como consecuencia, decayeron también las solicitudes de intervención. El primer ensayo se había realizado el 5 de septiembre, el segundo tuvo lugar el 30 del mismo mes y el tercero el 27 de octubre. Francia ha prometido ser parte del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares que se está negociando, una vez concluya su actual campaña, reducida ya oficialmente —por la presión diplomática, mediática y de la opinión internacional— a seis ensayos.

¹⁷ La demanda de Nauru fue presentada el 19 de mayo de 1989. La Corte se declaró competente por sentencia del 26 de junio de 1992 (Recueil CIJ. 1992, págs. 240 y ss.). Vid. A. BADÍA, *El asunto de Nauru contra Australia sobre la rehabilitación de las tierras fosfáticas...*, Anuario de Derecho Internacional (U. de Navarra), 1994, vol. 10, págs. 257-299. Un posterior arreglo amistoso entre las partes condujo al desistimiento de Nauru (Ordenanza de 13 de septiembre de 1993 (Recueil CIJ. 1993, págs. 322 y ss.).

oriental— un tratado de exploración y explotación de la plataforma continental en la zona del llamado *Timor Gap*, rebotante de hidrocarburos, sin pararmientes en la libre determinación frustrada del pueblo timorense, en absoluto representado por la potencia ocupante ¹⁸.

Vanas gentes éstas, dadas, además, a la mentira

Samuel P. Huntington, el brillante y celebrado profesor de Harvard, ha criticado opiniones como la de Fukuyama, que engloba bajo una denominación común (*endism*) para la que no hay traducción apropiada, estimándolas peligrosas y subversivas por crear una ilusión de bienestar que invita a la relajación, no a la acción ¹⁹. Pero si ésta es una percepción corriente, no corresponde desde luego a la intención de los autores. Todo lo contrario, Fukuyama advierte que el proceso de implantación progresiva de la democracia liberal requiere la activa intervención de gobiernos e individuos.

¹⁸ *Vid.* el texto del tratado en International Legal Materials (ILM), 1990, núm. 3, págs. 469-537. Un análisis del mismo en V. L. FORBES y F. M. AUBURN, *The Timor Gap Zone of Cooperation*, International Boundaries Research Unit (IBRU), Boundary Briefing núm. 9, Durham, 1991. La demanda de Portugal se presentó el 22 de febrero de 1991. La Corte, finalmente, por sentencia del 30 de junio de 1995 (aún no publicada al cerrar esta edición) decidió que no podía ejercer su jurisdicción debido a que, para ello, tendría que pronunciarse previamente sobre la legalidad de la conducta de Indonesia, que no era parte en el caso.

¹⁹ S. P. HUNTINGTON, *No Exit. The errors of Endism*, The National Interest, Otoño 1989, págs. 3-11, en pág. 4.

Una vez que el marxismo hecho revolución en Rusia renunció, al menos temporalmente, a la demanda troskista de la *revolución permanente* a escala mundial y, con ello, a transformar radicalmente la sociedad internacional de Estados soberanos, la afirmación del *Estado revolucionario* en el extenso solar de los zares, acabó haciendo del marxismo-leninismo la cobertura ideológica de una apuesta hegemónica alternativa a la de las grandes potencias capitalistas que, después de la Segunda Guerra Mundial, dio en un sistema esencialmente bipolar escondido bajo el paraguas de la ONU. Ahora, naufragado el Estado revolucionario, los conflictos soterrados por el llamado enfrentamiento Este-Oeste reaparecen y plantean la necesidad de encauzarlos dentro de un sistema uni o multipolar, más o menos institucionalizado y conforme con normas jurídicas. En estas circunstancias, la democracia liberal, presentada como ideología imbatible e insuperable, puede ser la energía motriz de la acción imperialista, particularmente de una gran potencia —Estados Unidos— que, por su origen, carece de otro fundamento nacionalista que no sea, justamente, la lucha por las libertades y la representación popular; más aún cuando, por definición, se rechaza la guerra entre países democráticos, lo que conduce fatalmente a la condenación de cualquier enemigo de los Estados Unidos.

El mismo Fukuyama ha advertido lo difícil que resulta a las administraciones que se suceden en Washington construir un sólido consenso que respalde una política exterior costosa sobre la base de los cálculos amorales y cínicos de la política del poder. Cuando la Administración Bush, comenta Fuku-

pre una *espada de Damocles* sobre la población civil. Con base en ella se ha llegado a justificar, por ejemplo, el bombardeo *moral* —otro caso de semántica perversa— que distingue entre aterrorizar a la población como objetivo prohibido y utilizar el terror para debilitar el espíritu de resistencia del enemigo. ¿Fueron Hiroshima y Nagasaki, que cumplen ahora cincuenta años, bombardeos *morales*? ¿Se inspiraron los responsables de la decisión en las palabras del canciller del Reich alemán en la Primera Guerra Mundial: «Todo medio calculado para acortar la guerra constituye la política más humana a seguir»? ⁸⁰.

Mirando al futuro, y no ya al pasado, pende de la Corte Internacional de Justicia la cuestión planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 14 de mayo de 1993, ampliada posteriormente, el 19 de diciembre de 1994, por una consulta elevada por la Asamblea General de las Naciones Unidas: ¿Es la amenaza o uso de las armas nucleares permitido en cualquier circunstancia por el Derecho Internacional? ⁸¹.

Aunque cabe suponer a los jueces de la Corte no particularmente contentos con el encargo y, últimamente, parecen inclinados a cobijarse en discursos procesales y en tecnicismos para no sacar las oportunas consecuencias de los principios que dicen sostener —como se ha evidenciado en su sentencia so-

⁸⁰ Cit. en C. AF JOCHNICK y R. NORMAND, *The legitimation of violence...*, cit., pág. 81. Vid. tb. págs. 86-89.

⁸¹ La resolución de la Asamblea General 1653 (XVI), reiterada en 1978, 1979 y 1981, afirmó que el uso de armas nucleares constituye una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas y es un crimen contra la Humanidad. Gran los tiempos de la guerra fría.

bre el asunto del Timor Oriental⁸² — su opinión se espera con especial interés. No hay que olvidar que la doctrina de la OTAN sigue incluyendo en sus planes la respuesta nuclear frente a un ataque masivo con armas convencionales.

Si la Corte dictamina que la amenaza y uso de las armas nucleares no está permitido bajo ninguna circunstancia, estas doctrinas —y los mismos ensayos nucleares, celebrados a miles en el pasado y actualmente en una moratoria por la que no se sienten ligados China y Francia, que siguen con ellos— quedarían definitivamente en entredicho. Pero nada garantiza que, si la *necesidad militar* lo requiere, la bomba atómica, sea de nuevo utilizada en la serie de bombardeos *morales* que ya fue condonada al término de la Segunda Guerra Mundial como una práctica consuetudinaria de las naciones.

⁸² Sentencia del 30 de junio de 1995. En ella, la Corte toma nota del hecho de que para las partes (Portugal y Australia) Timor oriental sigue siendo un territorio no autónomo y que su pueblo tiene derecho a disponer de sí mismo, pero evade el ejercicio de su competencia para pronunciarse sobre el tratado entre Australia e Indonesia concerniente a la exploración y explotación de la plataforma continental en la zona del *Timor Gap*, arguyendo que ello obligaría a la Corte a pronunciarse previamente sobre la licitud del comportamiento de Indonesia, que no es parte en el asunto ni ha consentido su jurisdicción. El dispositivo y la argumentación de la sentencia son más llamativos por haber sido adoptada por catorce votos contra sólo dos (Weeramantry, que suscribe una excelente opinión disidente, y Skubiszewski, juez *ad hoc* designado por Portugal).

¿Cómo no experimentar la sensación del renacimiento, bajo terminologías blandas, de los criterios de *semicivilización* y *barbarie* con los que se pretendieron justificar colonialismo e imperialismo hace apenas cien años? Las corrientes xenófobas y racistas *in crescendo* en los países más desarrollados (pero no sólo en ellos) son, en alguna medida, el precipitado burdo de determinadas actitudes de sus dirigentes frente a los problemas que afectan a la sociedad internacional en su conjunto.

Aunque sólo fuera para responder al crecimiento espectacular de miembros de la ONU y guardar una más estrecha proporción entre su número y el de quienes componen sus órganos selectivos, la Carta de las Naciones Unidas debería ser reformada. En el pasado, y por esta razón, ya hubo enmiendas: así, en 1963 —cuando la Organización, que contó en 1945 con 51 Estados fundadores, había alcanzado los 113 miembros— se aprobó que los miembros del Consejo de Seguridad fueran quince, aumentándose pues en cuatro los no permanentes (elegidos por dos años)²⁶¹. Ahora los miembros de la ONU son ya 185,

cidas por el Consejo de Seguridad en los últimos años y del problema de su *constitucionalidad* se debe a M. ORTEGA, *Hacia un gobierno mundial*, Salamanca, 1995. Vid. tb. A. SANJOSE, *Las consecuencias jurídicas de los actos 'ultra vires' de las Organizaciones internacionales, en particular de la ONU*, REDI, 1990, págs. 443-462; R. CASADO RAIGÓN, *Consideraciones sobre el control de las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas*, Anuario de Derecho Internacional (Navarra), 1994, X, págs. 335 y ss.

²⁶¹ Las enmiendas de 1963 (17 de diciembre), en vigor desde 1965 (31 de agosto) afectaron a los artículos 23, 27 y 61 de la Carta, este último concerniente al Consejo Económico y Social, que pasó de 18 a 27 miembros. Posteriormente se modificó el artículo 109.1, para adaptar la mayoría necesaria en el Consejo de Seguridad para

ANTONIO REMIRO
BROTÓNS

al haber tenido la descolonización continuación inesperada en la descomposición de las más importantes federaciones socialistas y de algún Estado más (como Etiopía, del que se ha separado Eritrea ²⁶²), así como por el hecho de la admisión de los antiguamente llamados *Estados exigüos* de Europa (Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino) ²⁶³. De esta manera, la relación *miembro de la Organización-miembro del*

"CIVILIZADOS, BARBAROS
Y SALVAJES EN EL NUEVO
ORDEN INTERNACIONAL
MC GRAW-HILL, MA-
DRID, 1996.

la convocatoria de una Conferencia general de revisión de la Carta a la nueva composición del Consejo (20 de diciembre de 1965, con vigencia desde el 12 de junio de 1968) y, de nuevo, el artículo 61, ampliándose por segunda vez el Consejo Económico y Social, que pasó a tener 54 miembros (20 de diciembre de 1971, en vigor desde el 24 de septiembre de 1973).

²⁶² Vid. R. GOY, *L'indépendance de l'Erythree*, cit., págs. 337-356.

²⁶³ Estos Estados fueron admitidos entre el 18 de septiembre de 1990 (Liechtenstein) y el 28 de julio de 1993 (Andorra). Su marginación formal de la Organización, apoyada en la relación especial con Estados vecinos que, generalmente, venían representándolos, carecía de justificación desde el momento en que la descolonización había procedido a estampillar como Estados soberanos, miembros de la ONU, a un buen número de microterritorios coloniales escasamente poblados. La universalidad de la Organización es imperfecta sólo por la suma de un número reducido de situaciones atípicas (Ciudad del Vaticano, Nauru, Suiza, Taiwan...) y de territorios no autónomos (como Palestina, Sahara occidental, Timor Oriental). Estos últimos accederán a la Organización si, finalmente, se convierten en Estados soberanos, lo que sólo es probable en el caso de Palestina. En cuanto a los primeros, sólo Taiwan a través de una veintena de países amigos, de América central y del Caribe sobre todo, trata desde hace unos años que se incluya en la agenda de la Asamblea general el punto de su admisión, lo que hasta ahora ha sabido impedir la República Popular China. Los otros sujetos mencionados carecen, por diferentes motivos, de voluntad política de ser miembros de la ONU. Aumentos posteriores del número de miembros podrán ser la consecuencia del éxito de otros procesos secesionistas en Estados que ya forman parte de la Organización.